

Valor jurídico de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual de la obra manuscrita

No ha mucho tiempo se nos expuso la siguiente cuestión jurídica, que por estimarla de interés, se la brindamos a los estudiosos, pues entraña indudable importancia desde el punto de vista registral de esta propiedad.

Se trata de una obra «musical y literaria», que por haber sido ejecutada en público, se presentó a inscripción en el Registro de la Propiedad intelectual; amparándose en el párrafo segundo del artículo 36 de la vigente Ley española de 1879. El Registrador creyó oportuna la admisión de la citada obra, por estar comprendida en dicho artículo, y ser los preceptos del mismo claros y terminantes.

Más tarde, dicha obra fué impresa, pero sin adiciones sustanciales que variaran su contenido, por lo que no se consideró necesario el que se efectuara una nueva inscripción de la misma. Hallándose la obra en esta situación legal, fué reproducida fraudulentamente, basándose en que la edición impresa no estaba inscrita, ni por tanto protegida. ¿Constituye este hecho el delito de defraudación?

No cabe la menor duda de que la intención del legislador, casi profética —si se tiene en cuenta la remota fecha de la Ley—, no fué la de considerar la impresión de una obra como su única forma de publicación, sino que dando el más amplio sentido a este término, entendió que una obra puede publicarse por otros procedimientos reproductivos, puesto que lo esencial de la cuestión es que la obra se dé a luz por cualquier medio (artículos 1.º de la Ley y 1.º del Reglamento).

En nuestra legislación se distingue, pues, claramente, la publicación de una obra de su existencia. Es notorio que la obra es siempre anterior al acto de su difusión. Que esta idea no pasó desapercibida a los redactores de la Ley lo acredita el hecho de que ésta extiende su protección no sólo a las obras publicadas, sino también a las no publicadas. Luego la nota fundamental para que una obra pueda ser protegida es que de ella haya tenido conocimiento el público.

Este conocimiento no se limita al que pueda resultar de la impresión de las obras, sino que comprende otros muchos medios de divulgación que la técnica moderna nos ofrece. Es incuestionable, que una obra debe considerarse publicada cuando es reproducida por primera vez por procedimiento distinto al de la imprenta, siempre que el nuevo procedimiento tenga la eficiencia necesaria para divulgar entre el público la producción de que se trate. Así, pues, cada vez es mayor el número de obras que se comunica al público por medio de la radio, televisión, microfilm, cinta magnetofónica, cyclostil, etc.

Mas la legislación española da aun mayor amplitud a la protección de la obra intelectual, pues la concede hasta a las manuscritas, y esta afirmación no se deduce de una interpretación extensiva de la Ley, sino que se basa de un modo directo en el propio texto legal (artículo 8.º en relación con el 7.º de la Ley).

En efecto, según el primer inciso del mencionado artículo 8.º, no es necesaria la publicación de las obras para que la Ley ampare la propiedad intelectual. Este precepto legal es una lógica consecuencia de lo ya establecido en el artículo 7.º de la propia Ley, que prohíbe la reproducción de obras ajenas sin permiso de su propietario, ni aun con el pretexto de anotarlas, adicionarlas o mejorar la edición.

Volviendo al artículo 8.º, se advierte que en el último inciso del mismo se extrema la protección a la obra del autor, negando el derecho a publicar sin su permiso una producción científica, literaria o artística que se haya estenografiado, anotado o copiado durante su lectura..., así como tampoco las explicaciones orales. Se da, pues, el caso curioso que la Ley no autoriza —sin previo permiso del autor—, la publicación ni aun de las *explicaciones orales*, extendiendo de este modo las garantías de protección de la obra

manuscrita, incluso a la obra oral. Nada importa que la manifestación del pensamiento del autor se haga en una u otra forma, pues desde que la obra existe —siquiera sea en forma oral— queda protegida por la Ley.

Con lo expuesto se demuestra cómo el legislador ha regulado la protección del manuscrito, configurándola de un modo independiente de las restantes protecciones jurídicas que establece. Donde más se advierte el carácter sustantivo de esta protección legal, es precisamente al examinar las normas referentes a la inscripción registral, que tanta trascendencia tiene en la regulación de la propiedad intelectual española.

Enfocado el artículo 36 de la Ley, precepto clave en esta materia, se observa cómo el legislador ha sido consecuente consigo mismo, pues al lado del procedimiento establecido para la inscripción de obras impresas,—en el amplio sentido de la palabra por nosotros indicado anteriormente—, señala otro distinto, en cierto modo privilegiado, para aquellas obras dramáticas o musicales no impresas, pero que se hayan representado o ejecutado en público.

Es de notar que este procedimiento especial de protección, por referirse sólo a las obras manuscritas representadas o ejecutadas en público, o sea, a las obras manuscritas publicadas —aunque esto parezca un contrasentido—, no alcanza a la obra manuscrita no publicada o propiamente dicha, cuyo procedimiento de protección no ha sido previsto por el legislador, por lo que, a nuestro parecer, está hoy al margen del Registro. Quizá la solución provisional del problema apuntado, mientras no se dicten normas legales apropiadas al caso, esté en la protocolización notarial de la obra manuscrita.

De todos modos, es incuestionable que el procedimiento contenido en el párrafo segundo del artículo 36, para inscribir la obra dramática o musical que se haya representado en público, pero no impresa, recibe un trato de paridad a la inscripción de dicha obra impresa. Por tanto, el autor que ampara en él su derecho obtiene los mismos beneficios legales que el que ha impreso y registrado su obra en la forma ordinaria. Ambas inscripciones gozan, pues, de idéntica protección legal, surtiendo los efectos de la inscripción definitiva, ya que no existe ningún precepto en la legislación española que apoye la tesis de considerar la inscripción de las obras manuscritas publicadas como de mero carácter provisional, que ne-

cesite ser confirmada por una posterior impresión e inscripción de la obra.

Esto es así, por cuanto el nacimiento de los derechos intelectuales —según la Ley española— está condicionado a la inscripción de las obras, habida cuenta del carácter constitutivo de nuestro Registro de Propiedad intelectual, que le diferencia en ese aspecto básico del que ofrecen otros Registros —como el de la Propiedad inmobiliaria—. Dada, pues, la idéntica naturaleza de los derechos de autor, no podía el legislador asignarles distintos efectos registrales, revistiendo a unos de carácter definitivo y a otros de mera existencia provisional o transitoria. Por eso, opta por concederles un trato de igualdad, tanto por lo que respecta a su contenido como a su duración; así, pues, todos ellos pueden ser objeto de gravamen en garantía de un préstamo, de transmisiones inter vivos, mortis causa, etcétera.

La doctrina sentada anteriormente no puede modificarse por el hecho de que la obra literariomusical, que fué ejecutada e inscrita a su tiempo al amparo del párrafo segundo del artículo 36, haya sido impresa con posterioridad; pues en todo caso esta impresión habría de considerarse como la segunda edición de una obra cuya primera está registrada. Y si estas posteriores ediciones, cuando no varían sustancialmente de la primera inscrita, fueran también accesibles al Registro, se multiplicaría el número de inscripciones de un modo innecesario y haría difícil saber el momento en que pueden considerarse nacidos los derechos intelectuales que dimanarían de la inscripción de una obra.

Esta posición nuestra viene corroborada por las disposiciones que al respecto han sido dictadas por los organismos competentes, que prohíben de una manera terminante la inscripción de segundas y posteriores ediciones cuando está inscrita la primera (R. O. de 11 de diciembre de 1894). Sólo cuando estas segundas o posteriores ediciones hayan sido modificadas y aumentadas, permite la disposición citada que sean también inscritas. Doctrina que vemos confirmada por la R. O. de 18 de abril de 1912, pues establece que aun tratándose de segundas ediciones de una obra, cuya primera no fué inscrita, tengan acceso al Registro cuando aquéllas sean refundidas, porque las refundiciones están garantizadas por la Ley. El fundamento jurídico de las disposiciones referidas se encuentra

en que tales segundas ediciones, cuando son refundidas, notablemente modificadas o aumentadas, constituyen en realidad una obra nueva y, por lo tanto, con derecho a participar de los beneficios de la Ley.

Mas no es este el caso que consideramos en el presente estudio, donde la obra literariomusical fué ejecutada en público y objeto de inscripción. Sólo bastante tiempo después de cumplidas estas formalidades legales se imprimió, no sufriendo alteraciones sustanciales esta segunda edición de dicha obra, que no se registró, por considerar sin duda que era eficiente para su protección la inscripción primera de la misma.

De lo expuesto se deduce, a nuestro entender, las conclusiones siguientes:

1.^a Que la obra manuscrita, aun antes de publicarse por ningún procedimiento, está amparada por la Ley española.

2.^a Que con mayor razón lo está cuando ha sido publicada por cualquier medio y el autor ha cumplido las formalidades legales acogiéndose al Registro.

3.^a Que los términos y eficacia jurídica de la protección no variarán porque la obra manuscrita en cuestión haya sido impresa con posterioridad.

4.^a Que la edición impresa de la referida obra ya inscrita anteriormente —mera reproducción de la primera—, no supone una nueva obra, sino una segunda edición de la misma, que no es inscribible, por estar ya protegida la obra de que se trata.

5.^a Que por este motivo, el hecho de plagiar la segunda edición impresa de una obra anteriormente inscrita, constituye el delito de defraudación —a que se refieren los artículos 45 al 49 de la Ley y 52 y 53 de su Reglamento—, por haberse producido una apropiación material de la obra protegida o la publicación de su contenido sin el permiso del autor, con usurpación de los derechos que la Ley reconoce a éste sobre su obra.

JUAN GIMÉNEZ BAYO
Director del Registro de Propiedad intelectual

LINO RODRÍGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE
Doctor en Derecho y Profesor A. de la
Universidad Central